



Ardelio Vargas bajo el cobijo de Barbosa

(Gabriela Hernández, pág. 40-42)

Puebla, Pue.- Cuando faltan dos meses para que arranquen las campañas electorales en la entidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta nombró subsecretario de Gobernación a Ardelio Vargas, un priista de la vieja guardia que ha sido señalado como represor, además de haber hecho su carrera de la mano de Genaro García Luna, hoy preso en Esta-dos Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En los comicios por la gubernatura en 2018, Vargas Fosado operó en los municipios de la Sierra Norte poblana a favor de la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, pero tras la muerte de ésta y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle —el 24 de diciembre de ese año—, el priista no tuvo empacho en sumarse al proyecto de Luis Miguel Barbosa Huerta y de la 4T en Puebla. En un acto el 26 de febrero de 2019 en el municipio Xicotepec de Juárez, Vargas Fosado le levantó el brazo a Barbosa, quien buscaba repetir como candidato de Morena en los comicios extraordinarios de ese año.

El hoy gobernador tampoco se ruborizó al justificar la adhesión de quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y secretario de Seguridad con Moreno Valle. “Son tiempos de reconciliación y unidad”, dijo.

Aunque las bases de Morena se in-conformaron, Barbosa argumentó que la suma de priistas a su campaña no significaba que tendrían cargos en su gabinete.

“Créanme que yo sé distinguir perfectamente a cada quien”, les aseguró. Los resultados de las elecciones extraordinarias de ese año dan cuenta de cómo operaron estas alianzas. Barbosa perdió en la zona urbana de Puebla, pero arrasó en municipios rurales, don-de un año antes había ganado la panista Alonso. En los distritos de la Sierra Norte, Vargas Fosado es ubicado como uno los principales operadores en ambas elecciones.

Al arranque del gobierno morenista, el 1 de agosto de 2019, se especuló que el también exdiputado federal priista sería secretario de Seguridad, pero por la fama que lo precedía Barbosa lo con-trató sólo como su asesor en la materia.

Vargas Fosado fue alcalde de su municipio natal, Xicotepec de Juárez (1987-1990), donde se le considera un “cacique”. Actualmente su hija Guada-lupe Vargas es alcaldesa priista con li-cencia, pues busca reelegirse.



Luego Vargas Fosado trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hasta 2006, cuando empezó su carrera en la Policía Federal Preventiva (PFP), donde estuvo al frente de los operativos en Atenco y contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. En 2010 Vargas Fosado contó en entrevista que conoció a Genaro García Luna, en ese entonces secretario federal de Seguridad, cuando fueron “orejitas” en Chiapas durante el levantamiento zapatista.

“Es mi cuate”, presumió. En 2011, cuando Moreno Valle lo nombró secretario de Seguridad Pública, se atribuye la decisión a una recomendación de García Luna. De la mano de Vargas Fosado llegó a Puebla Joaquín Arenal Romero, a quien conoció en el Cisen y fue el encargado de equipar y operar una red de espionaje durante el morenovallismo.

Durante su gestión en la SSP empezaron a instalarse en Puebla los grupos delictivos dedicados al robo de combustible; las organizaciones civiles lo acusan de represor y la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirma que usó balas de goma para desalojar a pobladores en Chignahuapan. Cuando fue comisionado del INM (2013-2018), activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde lo señalaron de violentar los derechos humanos de migrantes.

En marzo de 2018 fue nombrado asesor del gobierno de Antonio Gali Fayad. Superasesor En marzo de 2020 el gobernador Barbosa anunció que nombraría delegados de seguridad en los municipios de la zona conurbada de Puebla, pero sus propuestas tenían el sello de su asesor Vargas Fosado. Esto originó el rompimiento, que persiste hasta la fecha, entre la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y el mandatario estatal, ambos de Morena.

Barbosa comunicó a Rivera Vivanco la designación de Karla Morales, una incondicional de Vargas Fosado, como encargada de seguridad en la capital. La alcaldesa ha contado que acudió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en ese entonces a cargo como subsecretario de Gobernación, formalizado el pasado 22 de febrero, ocurre a la par de otro rompimiento.



La salida del secretario de Gobernación, David Méndez, vocero de Barbosa en ambas campañas, fue atribuida por columnistas allegados al gobernador, a una supuesta “traición” por acercarse a Armenta y a Rivera Vivanco y por pretender bloquear la llegada de Vargas Fosado a la dependencia. La alcaldesa Rivera Vivanco fue la única que reaccionó ante el nombramiento del priista: “Ya se nos olvidó lo de Atenco o entonces el discurso de ética y de los principios es solamente de dientes para afuera”. Para el politólogo Alejandro Guillén Reyes, desde el arranque de la actual administración ha quedado claro que Barbosa “se siente más a gusto en la confrontación que en el diálogo”, pues no deja de abrir frentes. El también integrante del Comité Esta-tal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción hace notar la “incongruencia” del mandatario, pues desde la campaña se ha centrado en ataques al morenovallismo; pero el ahora subsecretario fue parte de esa administración.

Además opina que el perfil de Vargas Fosado, con fama de “mano dura”, no sería el idóneo para un área como Gobernación, donde el adecuado sería alguien “con capacidad de negociación, diálogo y entendimiento”.

Guillén Reyes considera “preocupan-te el mensaje que el gobernador manda a los poblanos por el perfil de este nombramiento, que parecería más ser una decisión de un gobierno de derecha que de izquierda”. Aunque como secretaria de Gobernación fue nombrada Lucía Hill Mayoral, especialista en protección civil, el politólogo considera que al tener como segundo a un personaje como Vargas Fosado, será difícil que la funcionaria sea quien maneje “los hilos” de la dependencia. Y al coincidir el nombramiento de Vargas con el proceso electoral, dice:

“Así como el operador estrella fue Fernando Manzanilla (ahora enemistado con Barbosa), habrá que ver si la incorporación de Ardelio Vargas al gobierno no es para que cumpla ese papel”. No obstante, el pasado 12 de febrero Barbosa aseguró que en su gobierno no hay “una maquinaria electoral”, como ocurrió en administraciones pasadas: “No he vinculado el trabajo de las dependencias a las cuestiones político-electorales. Nadie quien trabaje en el gobierno del estado tiene instrucciones de ser operador político, como lo fue en los gobiernos de Tony Gali y Rafael Moreno Valle”, sostuvo el mandatario.



Caso Gutiérrez de la Torre: Filtración de alto nivel permitió su fuga *(Juan Omar Fierro, pág. 6-10)*

Una fuga de información entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina facilitó la fuga del exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de la diputada local Sandra Esther Vaca Cortés y del exsecretario de Finanzas de ese partido, Roberto Zamorano Pineda, antes de que se librarán las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa y trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación sexual agravada, en grado de tentativa.

La juez décimosexta Penal de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión la noche del martes 2, pero Gutiérrez de la Torre fue alertado previamente, por lo que huyó antes de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tuviera en sus manos el mandato judicial.

El acceso a ese expediente estuvo limitado a funcionarios de alto nivel en el caso del tribunal de justicia, y a un grupo selecto de elementos de la PDI en las horas previas a la orden de aprehensión, por lo que se investiga si la filtración ocurrió en ese último tramo de la responsabilidad.

La investigación del caso, que incluyó la reposición de los peritajes de audio y 40 nuevas diligencias, se mantuvo en absoluto sigilo entre el 11 de septiembre de 2020, cuando se anunció la revisión de la averiguación previa, y el 24 de febrero pasado, cuando la FGJCDMX resolvió ejercer acción penal contra el llamado Príncipe de la Basura.

Durante ese lapso la totalidad de la averiguación previa estuvo bajo llave en una oficina privada de la fiscalía. Menos de ocho personas, entre ministerios públicos, analistas y elementos de la PDI, tenían conocimiento de las nuevas diligencias, justamente para evitar que Gutiérrez de la Torre tuviera acceso ilícito al expediente.

A partir del 24 de febrero, cuando el expediente había sido entregado en los juzgados del tribunal y los elementos de la PDI entraban en acción, la secrecía de la indagatoria y la solicitud de una orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre se diluyó. Nuevos actores tuvieron acceso al pliego de consignación que revelaba las nuevas actuaciones de la fiscalía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que a dos días de que la FGJCDMX ejerciera la acción penal contra el expresidente del PRI-DF, cuatro de los cinco imputados en la averiguación previa comenzaron a modificar los comportamientos que habían mostrado durante meses de vigilancia previa.



Así, el sigilo que se había guardado sobre este caso durante más de seis meses quedó en riesgo una vez que el pliego de consignación llegó a funcionarios de alto nivel en el Tribunal Superior de Justicia capitalino – presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez– así como a la juez de turno, especializada en sistema penal inquisitorio.

La importancia estratégica del litio

(Patricia Mayorga, pág. 26-28)

Chihuahua, Chih.– “Quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es un traidor a la patria”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de febrero, luego de que empresas canadienses chinas y británicas han anunciado inversiones millonarias para proyectos del llamado “oro blanco”: el litio

Este metal blando alcalino es fundamental para la fabricación de baterías en todos los dispositivos electrónicos y es considerado esencial en la conversión de la industria mundial automotriz, que en esta década pasará del uso de la gasolina al de la electricidad, por lo cual usarán acumuladores.

Ante este panorama que hace atractiva la industria minera nacional ante las transnacionales, el presidente ha hablado del tema en tres conferencias matutinas durante este año:

“Era una fiebre de concesiones, muy parecido a lo que fue la fiebre de los baldíos durante el porfiriato; pero les ganó en la entrega de superficie, de enajenación del territorio nacional”, añadió.

En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dijo, se entregaron 120 millones de hectáreas de territorio nacional para concesiones mineras. “El doble de lo que se concesionó con Porfirio Díaz y más de la mitad del territorio nacional, que se compone de 200 millones de hectáreas”.

Mientras expertos y activistas confrontan sus ideas con legisladores y funcionarios acerca de que el litio represente la mejor opción para el manejo de energías limpias o para el mercado verde, el 11 de noviembre del año pasado el senador morenista Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa para nacionalizar el litio.

El legislador propone reformar el Artículo 27 constitucional y nacionalizar el litio para que las empresas extranjeras no se lleven toda la riqueza del metal, como ha sucedido con otros productos de la minería.

En entrevista, detalla que actualmente la explotación y extracción del litio están reguladas por el artículo 4 de la Ley Minera, que no lo considera un instrumento estratégico, como sucede con los hidrocarburos en el Artículo 27 de la Constitución.



No obstante, antes de dejar el cargo como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur soltó en junio de 2020 que el litio es el nuevo petróleo y llamó a nacionalizarlo.

“La idea de los autos eléctricos es ya un tema que debe estar atendido por el gobierno tanto de la Ciudad de México como por el gobierno federal y por el resto de los gobiernos”, dijo en el foro Pos Covid, pos neoliberalismo, la pandemia y el futuro de América Latina.

El exfuncionario, que renunció a su cargo dos meses después, informó que en el gobierno federal ya revisaban la posibilidad de crear autos eléctricos mexicanos generados por la propia inteligencia mexicana, con tecnología mexicana.

“México tiene litio también, mucho litio en Sonora... y pues estamos impulsando, esperemos lograrlo, que el gobierno nacionalice los recursos del litio y no deje que, porque ya están entrando las compañías chinas e inglesas y el litio se nacionalice, y que el gobierno cree una empresa, puede ser incluso público-privada, pero que el gobierno controle el uso del litio”, insistió en el foro.

Cuatro meses después de ese foro, quien era la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín, minimizó el potencial de litio en el país.

Sostuvo en otro foro de la misma dependencia: “México no tiene el yacimiento más grande de litio (...) México no produce litio, no hay un solo kilogramo que se produzca (...) tenemos unos yacimientos con una ley, con un contenido muy bajo”.

Sin embargo, López Obrador prevé que el litio será una fuente importante de ingresos y por eso ya plantea la idea de nacionalizar su producción.